**Alarmas y dilemas de la política de orden público de Milei**

Las violentas escenas del pasado miércoles 12 de marzo en el Congreso volvieron a poner en el centro de la escena la discusión sobre **el control de la calle**. Uno de los temas que mayor inquietud generan en la clase política y en la sociedad argentina en general, producto sobre todo de hechos del pasado reciente.

Son relativamente frescos para la memoria los sucesos de 2001, que detonaron la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Y los de 2002, que suscitaron el adelantamiento electoral durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde. Mucho más recientes, aunque con menos consecuencias políticas directas, resuenan los incidentes de fines de 2017, durante el mandato de Mauricio Macri.

**Hoy mismo, la manifestación convocada** bajo igual consigna que la semana pasada –“Marcha de los jubilados”, eufemismo usado para tratar de legitimar la movilización de otros actores que nada tienen que ver con dicha causa- **enciende todas las alarmas.**

No podría ser menos, considerando la lista de protagonistas de la convocatoria: los partidos de izquierda, sectores del kirchnerismo, grupos piqueteros y barras de fútbol, que ya asistieron la semana pasada, y a los que se suman hoy sindicatos de docentes universitarios y gremios del Estado como ATE.

Todos **actores políticos o sociales que tienen un prontuario inocultable de intentar la desestabilización por métodos antidemocráticos.** Los propios referentes de la izquierda, de manera manifiesta, son quienes vienen declarando desde diciembre de 2023 que a Milei hay que enfrentarlo en las calles.

Ante este evidente cuadro de situación, **el gobierno se muestra decidido a transmitir firmeza e inflexibilidad.** Quedó expuesto la semana pasada, cuando las distintas fuerzas de seguridad federales, con el apoyo de la policía de la Ciudad, reprimieron con dureza las agresiones de los manifestantes.

Sin perjuicio de algunas situaciones específicas sin clarificar adecuadamente por la ministra de seguridad Patricia Bullrich -como el grave ataque que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo, con una granada de gas lacrimógeno lanzada presuntamente por la gendarmería-, mediante el accionar policial el gobierno no hizo sino **ratificar su posición de fondo respecto a lo que considera uno de sus baluartes: el orden público.**

Y es en este sentido, y dado que los convocantes a la marcha de hoy prometen una movilización más masiva aún, que surgen **una serie de interrogantes** **y dilemas** de difícil respuesta, vinculadas a la posición oficial **respecto al orden en las calles**.

**¿Es aplicable el protocolo *antipiquetes* en situaciones de movilización masiva?**

Es indudable que uno de los pilares de este gobierno (junto a la economía) es la política de orden público, basada en un cambio de paradigma con respecto a los últimos 20 años: no se aceptan las interrupciones sistemáticas de la vía pública.

El éxito obtenido en esta materia (se redujeron el año pasado un 30% los piquetes a nivel nacional, y un 50% en la Ciudad) se fundó en, además de la erosión drástica del poder de las organizaciones sociales, la aplicación del protocolo *antipiquetes*.

Sin embargo, mientras esta resolución fue muy efectiva para reducir las movilizaciones de los grupos piqueteros, encontró severos obstáculos ante manifestaciones de mayor masividad, como las dos marchas universitarias durante 2024 o la de los colectivos LGTBI este año.

Claramente, evitar que decenas de miles de personas transiten por las vías de circulación y se circunscriban a hacerlo sobre las veredas, **en determinadas ocasiones, resulta impracticable.** No obstante, es fundamental que el gobierno profundice su política de evitar que los piquetes vuelvan a ser el paisaje cotidiano al que se tuvo que acostumbrar la ciudadanía los pasados 20 años.

**¿Qué ocurriría si este tipo de marchas, con participación de actores desestabilizantes, se vuelven recurrentes?**

En este punto el gobierno se encontraría ante una situación sin precedentes al menos durante la etapa democrática reciente. Plantearía un **escenario sociopolítico muy complejo**, el tener que transitar dos o tres años de mandato con escenas de violencia entre policías y manifestantes, por profesional que fuera la respuesta de las fuerzas del orden (lo cual es una incógnita en sí misma).

Por otro lado, esto tendría consecuencias para la imagen que busca transmitir el gobierno, en torno a la necesidad de mostrar un clima afín a las inversiones y a generar confianza internacional.

En tal escenario sería natural buscar una forma de descomprimir, de **gestionar el conflicto por mecanismos alternativos a la acción represiva**. Y de mínima, sería clave evitar el choque directo desarrollando acciones de prevención.

**¿Hay margen en la opinión pública moderada para tolerar una escalada de violencia en las calles? ¿Podría esto tener implicancias electorales?**

Parece haber una convicción en el gobierno de que, en parte por su debilidad de origen, debe mostrar firmeza para despejar dudas sobre su capacidad de ejercer el poder. Más aún, estando al acecho los ya citados sectores poco democráticos.

Pero, sobre todo, esa convicción se funda en un mandato ciudadano: tanto Javier Milei como Patricia Bullrich hicieron campaña prometiendo que se terminarían los piquetes sin contemplaciones y que se impondría la ley y el orden. La ratificación a esas postulaciones en las urnas, en octubre y noviembre de 2023, fue contundente. En la misma sintonía, según encuestas de fines de 2024, la política de control de piquetes y protesta social llevada a cabo por el gobierno cuenta con una valoración positiva por encima del 60%.

**Aquel mandato y esta percepción pública, entonces, refuerzan al oficialismo en la posición de dureza hacia cualquier intento de generar caos en las calles.**

Sin embargo, como ya hemos visto en no pocas ocasiones, **la opinión pública (o una parte significativa de ella) es cambiante**. Y así como una mayoría clara expresa estar a favor de terminar con los cortes de calles, si se indaga respecto a una eventual situación de violencia sobre manifestantes para liberar el espacio, la favorabilidad tiende a decrecer.

Estos vaivenes y contradicciones ocurren, sobre todo, en los sectores más moderados de la ciudadanía, ubicados en el centro del espectro político. Las escenas de una violencia desmedida podrían asustar a tales segmentos de votantes, que suelen oscilar en sus preferencias políticas. Justamente en la antesala de la campaña electoral, esto habilita a todo tipo de especulación.

**Hoy, y en las próximas semanas, podrá apreciarse como el gobierno, que está convencido que su política de orden público lo sitúa en el lado correcto de la historia, enfrenta estos dilemas.**

**Roberto Chiti**